

C.A. de Santiago

Santiago, seis de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Rachid Karim Majluf Cortés, abogado, en representación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), interponiendo reclamo de ilegalidad de conformidad con el artículo 28 de la Ley N° 20.285, en contra de la Decisión del Consejo para la Transparencia, respecto al Amparo Rol N° C-7761-22, notificada a esa parte el 24 de febrero de 2023, que acogió el amparo deducido por Carolina Jorquera.

Expone que con fecha 28 de julio de 2022, por medio de solicitud de acceso a la información pública, la tercera pidió lo siguiente: *“Quiero la información de las licencias médicas utilizadas por funcionarios de Junaeb durante el primer semestre de 2022. Nombre del funcionario, fechas y cantidad de días utilizados”*.

A esa petición se otorgó respuesta el 12 de agosto de 2022, por Resolución Exenta N° 2517, señalando que la información requerida contiene datos de carácter personal y sensible de sus trabajadores, protegidos en el artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.628, denegando su entrega, de conformidad con los artículos 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, así como jurisprudencia del Consejo.

El 17 de agosto de 2022 la requirente dedujo amparo ante la reclamada, fundado en la respuesta negativa y alegando que no se preguntó a los posibles afectados si estaban de acuerdo con entregar su información, siendo funcionarios públicos.

Indica que con fecha 16 de febrero de 2023 el Consejo Directivo resolvió el amparo, acogéndolo y ordenando entregar información sobre las licencias médicas utilizadas por funcionarios de esa entidad el primer semestre del año 2022, señalando el nombre del funcionario, fechas y cantidad de días utilizados, con el voto disidente del Presidente del Consejo, fundado en que concurría la



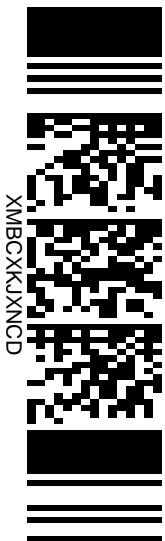
causal de reserva de afectación de derechos de terceros, que debe aplicarse sin distinguir entre funcionarios públicos y privados.

Sostiene que se configura la causal de reserva invocada, por afectación al derecho a la protección de los datos personales y la vida privada, toda vez que hacer uso de licencias médicas es tradicionalmente un indicio de un estado de salud, estando dentro de la categoría de datos personales sensibles, específicamente “los estados de salud físicos o psíquicos”, del artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.628.

Entiende que entregar la información solicitada equivale a entregar la licencia médica y, considerando que el empleador únicamente tiene información sobre los días de descanso y no los diagnósticos, se pregunta cuál sería la diferencia entre lo que pueda entregar como información pública, lo que procesa como empleador y la reserva del diagnóstico que obra en poder del paciente y funcionario.

Argumenta que el control de las licencias médicas no se ejerce mediante la publicidad de los datos personales, sino que a través de los organismos públicos que intervienen en el proceso de otorgamiento, aceptación y pago, así como la Contraloría General de la República, que determina la forma en que debe restituirse al Servicio las licencias rechazadas.

Hace presente que la justificación histórica del Consejo para la Transparencia para ordenar la entrega de información referida a licencias médicas -extensión y días- se fundamenta en la probidad en el ejercicio de la función pública y la transparencia -facilitación del control social-, pero luego de la reforma constitucional que estableció la protección de datos personales como un derecho expresamente reconocido, podría afirmarse que entregar información de este tipo con fines de control social es del todo desactualizada y contraviene expresamente las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación, contenidas en el artículo 19 N° 2 y N° 16 inciso 6° de la Constitución Política, así como la prohibición de discriminación por razones de salud, consagrada en el artículo 2° inciso 3° del Código del Trabajo.



De esa forma, observa, el razonamiento de la reclamada es erróneo, pues bajo su lógica estaría aceptando que el derecho de acceso a la información de todo ciudadano prima sobre el derecho a la intimidad y la vida privada de las personas que ejercen una función pública.

Solicita que se declare la ilegalidad de la decisión de amparo Rol C-7761-2022, por haber excedido sus atribuciones al interpretar un precepto legal contra texto expreso.

Segundo: Que por el recurrido comparece David Ibaceta Medina, abogado, Director General y Representante Legal del Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del reclamo en todas sus partes, por no haber incurrido en alguna ilegalidad.

Sostiene que la información cuya publicidad se controvierte es pública, de conformidad al artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República, y los artículos 3°, 4°, 5°, 10 y 11 letras a), b), c) y d) de la Ley de Transparencia, ya que la información que obra en poder de un organismo de la Administración Pública es, en principio, pública, sin importar su origen y, para desvirtuar ello debe acreditarse que concurre una causal de secreto o reserva establecida, como exige el artículo 8°, inciso 2° de la Constitución.

Precisa que lo requerido se circunscribe al dato numérico referido a la cantidad de días que los funcionarios públicos no realizaron sus labores -de manera justificada- y sus respectivas fechas, con lo que se busca acceder a información pública, sobre la que resulta procedente el ejercicio del control social, toda vez que dice relación con funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores y a sus registros de asistencia o inasistencia, como lo ha razonado ese Consejo en las decisiones que cita. Así, entiende que quedan fuera de discusión los datos personales y sensibles de los funcionarios, que siguen reservados y protegidos.

Indica que en relación al cumplimiento de la jornada laboral, tratándose de funcionarios públicos como son los pertenecientes a JUNAEB, ha razonado en forma invariable a partir del caso A181-09, que acceder a información sobre la asistencia de los funcionarios a sus labores habituales representa un mecanismo de rendición de



cuentas no sólo ante las jefaturas, sino que también ante la sociedad, pues se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de funciones públicas.

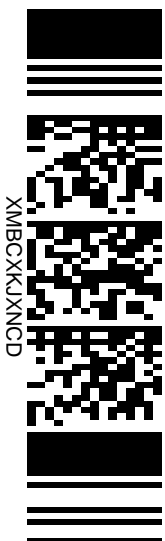
Razona que la información cuantitativa ordenada proporcionar es eminentemente pública, de conformidad al artículo 8° de la Carta Fundamental, y los artículos 5°, 10 y 11 de la Ley de Transparencia.

En este caso, la causal de reserva esgrimida por la recurrente es la prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con las disposiciones de la Ley N° 19.628. Sin embargo, la información ordenada proporcionar está directamente relacionada con el ejercicio de la función pública que desempeñan dichos servidores, en la medida que incide en el cumplimiento de la jornada laboral, la cual es remunerada con recursos públicos; por lo que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución y artículos 3° y 4° de la Ley de Transparencia, la información que se ha ordenado entregar al organismo, es esencialmente pública.

Cita jurisprudencia, de la que desprende que es la propia naturaleza de su condición de servidores públicos y de las funciones que desempeñan, lo que determina el carácter público de la información que se ordenó entregar y que estén sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso, precisamente para velar por el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública.

Descarta que la publicidad de la información requerida afecte el derecho a la vida privada de los terceros involucrados, por cuanto lo ordenado entregar no implica la develación de datos personales y sensibles.

Indica que de acuerdo a la jurisprudencia y las normas citadas, para determinar la afectación a los bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva o secreto de la información, es necesario, en primer lugar, no sólo que la información de que se trate concierna a las materias sobre las que éstos versan, sino que además su publicidad debe dañarlos o afectarlos negativamente en alguna magnitud y con alguna especificidad que habrá de ser determinada, daño que no cabe presumir, sino que debe ser acreditado por los



órganos administrativos o por los terceros. De este modo, si la información ordenada entregar es única y exclusivamente datos numéricos -la cantidad de días y fechas respectivas en que servidores públicos hicieron uso de licencias médicas en el periodo consultado-, no se avizora de qué manera la publicidad de aquella podría afectar en forma presente, probable y específica el derecho a la vida privada de los terceros involucrados.

Afirma que las alegaciones respecto de protección de datos personales y sensibles que fundan la mayor parte del reclamo no aplican al caso, pues no se ordena la entrega de datos personales, ni de las enfermedades o patologías sufridas por los funcionarios, ni del motivo o causal de las licencias médicas, ni copia de éstas.

Indica que la reclamante no logró acreditar la necesaria vinculación existente entre la revelación de la información consultada, cuya publicidad se pretende impedir y la afectación presente o probable y específica al bien jurídico protegido del derecho a la vida privada de los terceros involucrados, única forma en que ese Consejo podría haber declarado la reserva de la información requerida, carga procesal que corresponde a quien la alega.

Niega haber incurrido en tratos discriminatorios y arbitrarios en contra de los funcionarios públicos que hicieron uso de licencias médicas en los términos ordenados informar en relación a las personas que no detentan dicha calidad, ya que ese Consejo jamás ha sostenido que los funcionarios públicos por el sólo hecho de ser tal no tengan derechos fundamentales. Lo que ha señalado reiteradamente, es que los funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad, pero en el aspecto referido al ejercicio de sus funciones públicas deben dar un estricto cumplimiento al mandato constitucional de probidad y al deber de transparencia, lo que no quiere decir que se les esté discriminando arbitrariamente.

Concluye que la decisión adoptada se encuentra absolutamente ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al artículo 8 de la



Constitución Política y la Ley de Transparencia, no configurándose ninguna ilegalidad en su adopción.

Tercero: Que, no habiendo hecho sus descargos y observaciones la tercera interesada, por resolución de 2 de junio de 2023, se prescindió de los mismos.

Cuarto: Que como ha señalado esta Corte, el presente arbitrio -reclamo de ilegalidad por acceso o denegación a la información pública- se encuentra contemplado en el artículo 8 de la Ley N° 20.285, norma que prevé que vencido el plazo para entregar la información requerida o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, el solicitante podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 29 y 30 del referido cuerpo normativo.

Quinto: Que el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria N° 1341, celebrada el 16 de febrero de 2023, resolvió la solicitud de amparo por medio de la Decisión Rol C-7761-2022, acogiéndola por los miembros presentes, salvo el voto del Presidente, por los siguientes fundamentos:

“1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, a la solicitud de la reclamante. Dicho requerimiento se refiere a información de las licencias médicas utilizadas por funcionarios de la JUNAEB durante el primer semestre de 2022, señalando el nombre del funcionario, fechas y cantidad de días utilizados. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información solicitada por tratarse de datos sensibles conforme lo dispuesto en la Ley N° 19.628, en relación con el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental”.

Los fundamentos de la decisión son los siguientes:

i) numeral tercero: “... atendido al tipo de labores que desempeñan los funcionarios públicos, cabe señalar que estos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes laborales y profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño,



registros de asistencia, antecedentes curriculares, liquidaciones de sueldo, contratos y otros similares, incluyendo el nombre de servidores y ex servidores públicos...”

ii) numeral quinto: “... lo pedido no se refiere a copia de las licencias médicas presentadas por los funcionarios, ni antecedentes que den cuenta de las patologías que justificaron su otorgamiento, información que sin duda, se encuentra protegida por la ley N° 19.628 por constituir un dato sensible, sino que se refiere, efectivamente, al dato numérico referido a la cantidad de días en que un funcionario público no realizó sus labores -de manera justificada-, al número de licencias médicas presentadas y sus respectivas fechas, con lo que se busca, en definitiva, acceder a información de carácter público, sobre la cual resulta procedente el ejercicio del control social, toda vez que dice relación con funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores y a sus registros de asistencia o inasistencia (...) por lo que las alegaciones del órgano deberán ser desestimadas”.

iii) numeral sexto: “...lo pedido, sobre los días y fechas de licencia médica de servidores públicos, no tienen por objeto conocer la individualización de las patologías que justificaron el otorgamiento de dichas licencias médicas -antecedente que se encuentra protegido por el artículo 10 de la Ley N° 19.628 y 13 de la ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que las personas tienen en relación con acciones vinculadas a su atención de salud-, sino que se trata de información de naturaleza pública que permite ejercer un adecuado control social sobre el ejercicio de un derecho funcionario contemplado en el artículo 89 y 111 del Decreto con Fuerza de Ley 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, sobre Estatuto Administrativo, o para efectos de la consideración por parte del jefe de servicio de salud incompatible para el cargo del respectivo funcionario”.

iv) numeral octavo: “Que, en consecuencia, tratándose lo requerido de información de carácter público, referida a funcionarios públicos, respecto del cumplimiento de sus respectivas jornadas de trabajo y no a datos sensibles referidos a las patologías que los afectaron, y habiéndose desestimado las alegaciones del órgano,



este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de los datos solicitados”.

En razón de lo expuesto, el Consejo para la Transparencia, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 24 y siguientes y 33 letra b) de la Ley de Transparencia, acordó acoger el amparo deducido por doña Carolina Jorquera, en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, requiriendo a la Sra. Secretaria General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que entregue a la reclamante la información sobre las licencias médicas utilizadas por funcionarios de la JUNAEB durante el primer semestre de 2022, señalando el nombre del funcionario, fechas y cantidad de días utilizados.

Sexto: Que cabe tener presente que tratándose de un reclamo de ilegalidad, se debe determinar si el Consejo para la Transparencia, al acoger decisión de amparo Rol C7761-2022, de 16 de febrero de 2023, y disponer la entrega de la información requerida a Carolina Jorquera, ha incurrido en la ilegalidad que se ha denunciado por la recurrente, al desestimar la causal de reserva consagrada en el numeral 2° del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Séptimo: Que al respecto, se debe tener presente que el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, dispone: “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

Por su parte, la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, en su artículo 1° enuncia que dicha Ley regula “el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información”. Dicho principio implica que los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del



Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial, así como los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones contempladas en dicha ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Por su parte, el artículo 10 de la citada ley dispone: “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.”

Luego, el derecho de acceso a la información pública, se encuentra enmarcado por diversos principios contenidos en el artículo 11 de la Ley N° 20.285, los que deben ser considerados en el ejercicio, procedimiento, tratamiento y cumplimiento de dicha ley, entre los cuales se encuentra el principio de la Libertad de información, contenido en su letra b), esto es, que toda persona goza del derecho de acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las excepciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 y las establecidas por leyes de quórum calificado.

Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Transparencia establece: “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de



creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.

La causal de reserva, en lo que interesa al presente reclamo, es la contenida en el numeral 2° del artículo 21 de la Ley N° 20.285, norma que prescribe: “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes (...): 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”.

A lo anterior se une lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto N° 13 de 2009, Reglamento de la Ley N° 20.285, que establece que las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, serán las siguientes: “2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada, sus datos sensibles o derechos de carácter comercial o económico. Se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés”

Octavo: Que en el presente reclamo de ilegalidad se cuestiona la calificación de los antecedentes requeridos, estimando la reclamante que se trata de información que contiene datos de carácter personal y sensible de sus trabajadores, que afectan su vida privada, los que se encuentran protegidos en el artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.628.

El artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.628, señala que son datos sensibles: “aquellos datos personales que se refieren a características físicas o morales de las personas o a los hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y las opiniones políticas, las creencias y las convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”.

Ahora bien, se debe recordar que la decisión de amparo cuestionada dispuso la entrega de la información sobre las licencias



médicas utilizadas por funcionarios de la JUNAEB durante el primer semestre de 2022, señalando el nombre del funcionario, fechas y cantidad de días utilizados. En consecuencia no se trata de la entrega de las licencias médicas o de su contenido, ya que, en esos casos implica revelar el diagnóstico médico o los antecedentes de salud de los funcionarios públicos, que podrían afectar su vida privada, tal como dispone el artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.628.

Ahora bien, tal como ha razonado el Consejo, en este caso se requiere un dato estadístico que se encuentra asociado a una licencia médica, pero sin que se requiera revelar su contenido, por lo que se trata más bien de datos que se relacionan con el cumplimiento de las labores desempeñadas por los funcionarios públicos de Junaeb, en especial, respecto de lo dispuesto en los artículos 89, 111 y 151 del DFL N° 29, del Ministerio de Hacienda, del año 2004, sobre Estatuto Administrativo.

El artículo 89 señala que todo funcionario tendrá derecho, entre otros, a hacer uso de licencias. Luego, el artículo 111 define la licencia médica como: “el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, en su caso. Durante su vigencia el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones”.

Por su parte, el inciso 1° del artículo 151 dispone: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.

Tales normas permiten ejercer un control al cumplimiento de las jornadas de trabajo de los funcionarios públicos, es decir, se refieren al desempeño funcionario.

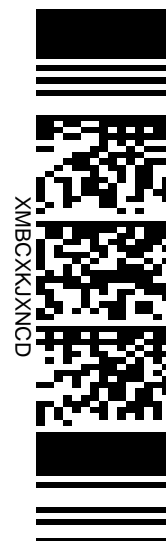


Por consiguiente, queda suficientemente establecido que la información requerida no puede ser calificada como datos sensibles, en los términos del artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.628.

Por el contrario, la información requerida es pública, que se relaciona con datos estadísticos referentes al desempeño de funciones públicas del personal de Junaeb y, por ende, no afecta derechos de terceros en el ámbito de su vida privada, tal como razona el acto reclamado en el numeral sexto. En efecto, para que pueda configurarse la causal de reserva, se precisa una afectación real de los derechos personales, desde que el riesgo invocado como excepción a la publicidad de los actos de la administración, debe ser evidente, claro y no supuesto o eventual, situación no demostrada en este caso, puesto que no se advierte el riesgo fundante de la reclamación –que hacer uso de licencias médicas es tradicionalmente un indicio de un estado de salud, lo que es un dato sensible- y, consecuentemente, no se configura la causal de reserva contenida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

En apoyo de lo antes dicho, la Excma. Corte Suprema ha resuelto: *“...de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso 2° de la Constitución Política y artículo 21 de la Ley de Transparencia, para determinar la afectación a los bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva o secreto de la información, es necesario, en primer lugar, no sólo que la información de que se trate concierna a las materias sobre las que éstos versan, sino que además su publicidad debe perjudicarlos o afectarlos negativamente en alguna magnitud y con alguna especificidad que habrá de ser determinada, daño que no cabe presumir, sino que debe ser acreditado por los órganos administrativos o por los terceros, que efectivamente tiene una probabilidad cierta o presente y con suficiente especificidad de ocurrir, empleándose para ello, el denominado “test de daño” (Rol N°49.981-2016).*

Noveno: Que conforme a lo antes indicado, las normas legales y Constitucionales citadas, coincidiendo esta Corte con los fundamentos vertidos en la Decisión Amparo reclamada, es que no se advierte ilegalidad alguna en la decisión adoptada por el Consejo



Directivo del H. Consejo para la Transparencia que ha sido cuestionada, por lo que la reclamación de ilegalidad interpuesta necesariamente deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley N° 20.285, **se rechaza**, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por Rachid Karim Majluf Cortés, abogado, en representación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), y en contra de la Decisión de Amparo Rol C7761-22, adoptada en sesión ordinaria N° 1341, celebrada el 16 de febrero de 2023, del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, que acogió el amparo antes indicado.

Redacción de la ministra (S) Sra. Villegas Pavlich.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad

N° Contencioso Administrativo-157-2023.-

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya, la Ministra (S) señora Erika Andrea Villegas Pavlich y el Abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq.

En Santiago, seis de diciembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M., Ministra Suplente Erika Andrea Villegas P. y Abogado Integrante Euclides Ortega D. Santiago, seis de diciembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a seis de diciembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

